

Presentación del dossier: Mujeres indígenas como sujeto de política pública y programas gubernamentales y proyectos no gubernamentales

Presentation of the dossier: Indigenous women as subjects of public policy and governmental programs and non-governmental projects.

Mariana Gómez

Las mujeres indígenas (mujeres que se autoreconocen como integrantes de pueblos indígenas) como sujeto de política pública y programas gubernamentales (desde el Estado) y proyectos no gubernamentales (por parte de ONG, fundaciones y agencias de cooperación internacional) es un fenómeno presente en varias regiones y países de Latinoamérica y el Caribe pero, mientras las políticas y programas de corte estatal comienzan a aparecer a partir de las reformas estatales iniciadas en los años 90 en países que se reconocieron multiculturales, pluriculturales e incluso plurinacionales, aquellas implementadas por agentes no gubernamentales de distinto tipo (religiosos y laicos) son de más larga data y comenzaron actuando en el campo de la salud, la educación no formal y el impulso al trabajo artesanal y la agricultura, prácticas que hunden sus raíces en el paradigma del desarrollo -con y sin perspectiva de género- aplicado a pueblos y comunidades indígenas desde la década de 1960 en adelante (Gómez y Gigena, 2023).

Mariana Gómez 

Universidad Nacional de San Martín – Argentina. marianadanielagomez35@gmail.com

<http://doi.org/10.46652/pacha.v4i10.189>
ISSN 2697-3677
Vol. 4 No. 10 enero-abril 2023, e230189
Quito, Ecuador

Enviado: abril 23, 2023
Aceptado: abril 24, 2023
Publicado: abril 29, 2023
Publicación Continua

Para este dossier convocamos a colegas que, desde el Sur Global, presenten trabajos, en base a sus líneas de investigación, en donde se analicen, visibilicen y problematicen casos o estudios comparados de políticas públicas y programas gubernamentales y proyectos no gubernamentales dirigidos a mujeres indígenas de diversos pueblos. Para ello sugerimos tentativamente los siguientes ejes:

- Genealogía, historia y/o trayectorias de las políticas públicas y programas gubernamentales y proyectos no gubernamentales (ONG u otras agencias) orientados a las mujeres indígenas.
- Actores, beneficiarios/as y agencia política en el diseño e implementación de políticas públicas y programas gubernamentales y proyectos no gubernamentales (ONG u otras agencias) orientados a las mujeres indígenas.
- Agendas, sujetos, temas y campos de intervención/acción de las políticas públicas y programas gubernamentales y proyectos no gubernamentales (ONG u otras agencias)) orientados a las mujeres indígenas.
- Articulaciones (locales, nacionales y transnacionales), estrategias, negociaciones y resistencias en las políticas públicas y programas gubernamentales y proyectos no gubernamentales (ONG u otras agencias) orientados a las mujeres indígenas.
- Ciudadanía, subjetivación, identidades, demandas y conflictos en/con las políticas públicas y programas gubernamentales y proyectos no gubernamentales (ONG u otras agencias) orientados a las mujeres indígenas.

Ahora bien, concretamente, este dossier quedó integrado por 5 artículos, en todos se reivindica la necesidad de una perspectiva de análisis interseccional (aun cuando el término sea polisémico y pueda ser tomado como concepto, perspectiva de análisis o enfoque para diseñar políticas) y se apoyan en teorizaciones y conceptos de autoras del feminismo decolonial, incluso para analizar el empoderamiento económico o el enfoque de Género en el Desarrollo (que provienen de un feminismo muy distinto como es el “institucional” o “civil”). El referido a las mujeres de Kenia, más precisamente las de la isla de Lamu, es el único que analiza un programa de empoderamiento económico implementado por una ONG que ya lleva varios años; los cuatro restantes situados en Argentina expresan motivaciones, expectativas, deseos y necesidades en torno a la creación de políticas y programas para atender problemáticas y demandas de mujeres indígenas (o de comunidades) en distintas regiones del país que, hasta ahora, no existen ni han existido. No obstante, en todos los casos se discute, sobre la base de investigaciones aplicando distintas metodologías, qué aspectos y condiciones deberían considerarse. Vayamos por orden y por partes.

El artículo de Ana Fernández Quiroga nos introduce en las experiencias de “empoderamiento económico” (en sus efectos, límites y significados) de mujeres de la etnia Swahili, uno de los 44 grupos étnicos (grupos indígenas y sociolingüísticos) que habitan en Kenia, país que obtuvo la independencia del Imperio Británico recién en 1963 (y donde en la actualidad los pueblos indí-

genas son reconocidos sólo en calidad de minorías étnicas puesto que el Estado nunca adhirió al Convenio 169 de la OIT). El artículo analiza la trayectoria e impacto del proyecto de una ONG en la isla de Lamu en el que se desempeñan mayoritariamente mujeres Swahili y de otras dos etnias menos numerosas. Se contrata a las mujeres para producir artesanías y a cambio se les garantiza un salario regular, derecho a la salud y educación para ellas y sus niños, acceso a microcréditos y otras capacitaciones. Todas las mujeres entrevistadas por la autora subrayan la importancia y los cambios positivos que trajo a sus vidas el poder contar con un sueldo aunque, por contrapartida, deben aprender a lidiar con la violencia de sus maridos, quienes quieren controlar y gestionar los ingresos generados por ellas y sus nuevas formas de agenciamiento femenino. Dos conceptos centrales son empoderamiento económico, asociado al enfoque Género en el Desarrollo que se incorporó y expandió a partir de las Conferencias de la Mujer de la ONU, y violencia económica (incluyendo la violencia que significa que las mujeres no puedan administrar el dinero que ganan autónomamente).

El análisis adhiere, por un lado, a una epistemología feminista, donde se complementan los dos roles asumidos por la autora (la labor de investigación y de coordinación en el proyecto), por el otro, hay una clara perspectiva interseccional para mostrar que las experiencias de empoderamiento de las mujeres varían en función de la etnia a la que pertenecen y al nivel educativo previo, ya que existen jerarquías de clase entre las distintas etnias de la isla aunque, por lo general, todas están insertas en distintos tipos de trabajos dentro de la economía informal donde las mujeres tienen menos probabilidades de trabajar fuera del hogar, y menos aún, de trabajar a cambio de un salario regular. De ahí que la intervención de esta ONG con sus proyectos -desde el año 2009- sea disruptiva en la vida de las mujeres y sus familias. Así, en este artículo, veremos que la desigualdad laboral y el ingreso a un trabajo asalariado se consideran desde una perspectiva interseccional que tiene en cuenta otros condicionantes como la pertenencia étnica, aspectos educativos y sociales. El análisis también expone los límites estructurales de los proyectos y programas de las ONG para “transformar” las desigualdades y opresiones de manera estructural pero sin negar que los programas ayudan a, como se dice en el lenguaje tecnocrático de los actores de la cooperación internacional, “aliviar” la pobreza mediante diferentes estrategias económicas.

La interseccionalidad también aparece planteada como un “imperativo” para el diseño de políticas públicas para hacer frente a la violencia sexual del *chineo* en el artículo de Ana Rodríguez Flores, un tipo de violencia sexual extrema de origen colonial pero actual, llevada adelante contra mujeres, jóvenes y niñas de grupos indígenas chaqueños por parte de varones criollos, por ende, un tipo de violencia sexual racializada, hasta poco tiempo atrás imaginada como una “costumbre cultural” en dicha región. La autora del artículo ya cuenta con una investigación previa donde analiza esta problemática partiendo del análisis de casos ocurridos en las últimas décadas (estudio de casos) (Rodríguez Flores, 2021). El marco teórico-conceptual elegido para analizar el origen y las desigualdades que se cruzan cuando el cuerpo de las mujeres indígenas es sexualmente violentado, son los estudios de la colonialidad (con conceptos como “colonialidad del poder”, “colonialidad de género” y “colonialidad del saber”) aplicados a la región del Chaco y a las relaciones interétnicas e interraciales entre grupos indígenas (y sus mujeres) y criollos. Así, la violencia

sexual interétnica e interracial se originaría, según la autora, en el “proceso de inferiorización social y consecuente discriminación sufrido por las mujeres indígenas de Nuestra América como resultado de la colonialidad del poder”, que de entrada “inferiorizó a las poblaciones originarias”.

El objetivo particular del artículo es reflexionar sobre cómo debería vertebrarse un enfoque interseccional en el diseño e implementación de una política pública para abordar este problema, previamente a hacer un breve repaso sobre los alcances de la interseccionalidad como concepto. Utilizado como concepto, queda claro que puede iluminar cómo las mujeres racializadas (por ejemplo, las afrodescendientes, negras, marrones e indígenas) experimentan opresiones diferentes porque en sus experiencias se entrecruzan el racismo y el sexismo (dentro y fuera de sus grupos de pertenencia), y también mayores desigualdades de clase, dado que las jerarquías de clase, desde la colonización en adelante, se montaron sobre jerarquías raciales y de género.

Respecto de la dimensión de clase, la autora sugiere que, en el caso de las mujeres indígenas del Chaco, se encuentra vinculada a la discriminación racial en el marco de la “racialización de las relaciones de clase”. Sin embargo, aquí cabe recordar que la situación de clase (la explotación) de la población indígena en la región del Chaco tiene varios estudios que buscaron explicarla y analizarla y, de manera breve, podemos decir que cuando los y las indígenas del Chaco estuvieron incorporados a los mercados de trabajo que ofrecía el capital privado a través de las agroindustrias regionales (ingenios azucareros, obrajes, algodones) lo fue en calidad de mano de obra hiperbarata sin derechos laborales, “contratada” en muchos casos mediante la coacción y el engaño y que, desde hace por lo menos seis décadas, se encuentran afuera del mercado de trabajo (porque aquel que había ya no existe más) y sobreviviendo mediante actividades económicas de autosubsistencia (pequeños cultivos, cría de animales, pesca, caza y recolección en caso de que tengan acceso al territorio), producción y venta de artesanías (“economía popular”) y, principalmente, vía los subsidios de las políticas sociales universales (federales) y pensiones no contributivas. Se abre la pregunta, entonces, sobre si es posible “revertir la pobreza estructural” de este sector de la población argentina mediante algún tipo de política pública, por un lado y, por otro, si todo lo que puede brindar una política pública (articulada entre dependencias/agencias estatales y no gubernamentales e internacionales, tal como se está pensando en la provincia de Salta) para tratar la violencia sexual es sólo un mayor acceso a la justicia estatal y medidas de reparación para las víctimas y sus familias. De la poca investigación que hay algo va quedando claro: las instituciones estatales para denunciar e iniciar un proceso de justicia no llegan (o llegan muy tarde porque discriminan a quienes denuncian) a los territorios donde se asientan las comunidades indígenas.

En el artículo de Daniela Pessolano encontramos un análisis centrado en las actividades que conforman el trabajo doméstico y de cuidados (trabajos no remunerados pero fundamentales para el sostenimiento de las unidades domésticas y de toda una economía campesina en ámbitos rurales de Mendoza), realizados casi en su integridad por mujeres. Los datos analizados provienen de una encuesta denominada Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en 2019 en la provincia de Mendoza. Esta herramienta o técnica para la recolección de datos se vincula a las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) que se vienen aplicando en varios países para la producción

de estadísticas sobre las actividades que realizan las personas y el tiempo dedicado a cada una de ellas, datos relevantes al momento de diseñar políticas públicas con perspectiva interseccional. La hipótesis de partida del trabajo es que las cargas de trabajo no remunerado son mayores en los territorios rurales que en los urbanos, dada la falta de infraestructura y de servicios en general para la población.

El marco conceptual-analítico retoma algunas discusiones feministas sobre el trabajo doméstico, el vínculo entre trabajo reproductivo y productivo y debates más nuevos en América Latina y el Caribe sobre el “trabajo de cuidados”, un tipo de trabajo que contiene claras dimensiones vinculares, emocionales y afectivas (como el cuidado de niños y personas mayores dependientes). Como tal, forma parte del trabajo doméstico no remunerado y realizado en su mayoría por mujeres. En el artículo se definen categorías más abarcativas que circulan en los debates actuales sobre las “políticas de cuidado” como Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) y Economía del cuidado (EC). Cabe mencionar que en Argentina, en mayo de 2021, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Cuidados que busca la creación de un Sistema Integral de Cuidados y que aguarda su tratamiento: “Se calcula que invertir en servicios de cuidado, como por ejemplo, los jardines de infantes o los servicios de larga estadía para personas mayores, y que se cubra para 2030 el déficit de los cuidados en cantidad y calidad generaría casi 2 millones de puesto de trabajo formales”. Las estadísticas vienen mostrando que las mujeres invierten el doble de tiempo que los varones en realizar tareas domésticas y de cuidados, una división sexual del trabajo injusta y desigual.

Sobre la necesidad de algún tipo de política pública que contemple los derechos comunitarios sobre la propiedad intelectual y cultural de los pueblos originarios trata el artículo de Anahí Mariluan y Rosario Haddad, músicas, compositoras e investigadoras en el campo de la etnomusicología y los “patrimonios sonoros” (músicas y cantos) que conservan y re-producen comunidades qom de la provincia de Chaco y comunidades mapuche en el sur argentino, a pesar de los procesos de sometimiento y desterritorialización llevados adelante por el Estado argentino. Así, este artículo ofrece algunas claves de entrada y de lectura para abordar el problema de la propiedad intelectual comunitaria indígena en relación al patrimonio cultural inmaterial, partiendo de experiencias de trabajo etnográficas colaborativas (y restitutivas) y la lectura de documentos y legislaciones.

Desde una perspectiva decolonial, las autoras se refieren al vacío legal para cuidar, proteger y reglamentar algún tipo de “propiedad intelectual indígena comunitaria” (así como la ausencia de políticas públicas afines) que permita resguardar jurídicamente las “expresiones sonoras colectivas o comunitarias” (cantos, sonidos y “toques” ancestrales) y/o “expresiones artísticas comunitarias” (todas formas de patrimonio cultural inmaterial o intangible) que existen y continúan transmitiéndose en comunidades y territorios indígenas: “tales amparos harían frente al extractivismo cultural que los pueblos denuncian como consecuencia de la falta de regulación y derechos intelectuales. Mientras tanto, observamos y somos partícipes de acciones de resguardos autónomos y autogestivos”. Si el campo del derecho intelectual, hasta ahora, sólo tiene en cuenta las crea-

ciones individuales, entonces: ¿Cómo proceder cuando se trata de cantos que no tienen propiedad pero se los quiere registrar para evitar el “extractivismo cultural”? Según las autoras, “las figuras comunitarias no tienen lugar en las agencias reconocidas estatalmente para la protección de fonogramas” pero, sin embargo, en una de las experiencias de investigación que se narra en el artículo (restitución sonora llevada adelante con mujeres cantoras mapuche de Ruca Choroy, Neuquén), la propiedad del fonograma pudo inscribirse apoyándose en la figura jurídica de la comunidad.

Finalmente, las reflexiones que trae el artículo de María Milagros Argañaz se enmarcan en una investigación más amplia sobre el acceso y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de mujeres diaguita-calchaquí cuyas comunidades se asientan en el Valle Calchaquí de Tucumán y pertenecen a la Unión de Pueblos Diaguitas. En este trabajo se describen y analizan las demandas de mujeres para poder tener/hacer sus partos en un servicio de salud público con enfoque/atención intercultural en su territorio. El análisis se basa en datos provenientes de observaciones y de testimonios tomados de varias entrevistas a mujeres sobre sus historias de embarazo y parto. Para cruzar estos datos y construir una mirada analítica se basa en una perspectiva interseccional, los estudios decoloniales y la psicología social-comunitaria para “atender a las múltiples formas de opresión y desigualdad” que experimentan estas mujeres y plantear que la ausencia de un servicio obstétrico adecuado despliega sobre sus cuerpos una violencia estatal y patriarcal en el marco del avance de políticas neoextractivistas en la región.

Referencias

- Gómez, M., y Gigena, A. (2023). Las mujeres indígenas como sujeto de política gubernamental. Breve panorama en el contexto latinoamericano y argentino. *Revista Estado y Políticas Públicas*, 20(11) (*en prensa*).
- Rodríguez Flores, A. (2021). *El chineo o la violación como costumbre. Violencia sexual de varones criollos hacia mujeres indígenas en el Chaco argentino*. [Tesis de Maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO]. <http://hdl.handle.net/10469/17226>